

América Latina y el poder corporativo Una crítica a los compromisos asumidos en materia de inversiones extranjeras – BRASIL y la realidad político-social.

Los tratados de libre comercio han acabado con numerosas funciones estatales y han beneficiado a empresas transnacionales cuyo respeto por los derechos humanos se encuentra en discusión

Durante los últimos treinta años, hemos visto una tendencia creciente de los Estados a adoptar compromisos que garantizan el libre movimiento del capital. Dicha tendencia se plasma hoy en la existencia de más de 250 Tratados de Libre Comercio (TLC), y más de 3.000 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). En la actualidad, *libre comercio* es sinónimo de una extensa agenda de acuerdos donde se le otorgan amplios derechos a las corporaciones que tienen potencial para exportar capital, mientras se reconfiguran las funciones de los Estados.

La proliferación de TLC Y TBI especialmente desde los años noventa estuvo asociada a dos grandes promesas: 1) que los tratados generarían el desarrollo, ya que se basan sobre la premisa de que el aumento del comercio provoca el crecimiento económico, incrementando el bienestar general; 2) que la “seguridad jurídica” otorgada traería un aumento de las inversiones extranjeras. Sin embargo, más de veinte años después de la firma masiva de TLC y TBI, las promesas no se han cumplido. La liberalización comercial ha avanzado sin freno, pero eso no se ha traducido en un aumento del bienestar para los pueblos.

América Latina no quedó exenta de las promesas incumplidas. Los capitales extranjeros llegaron a la región, pero no siempre en el formato de inversiones de tipo *greenfield*, es decir, en la instalación de fábricas y nuevas inversiones que generan empleo y tienen efecto multiplicador sobre las economías. En ciertos casos como Argentina, las inversiones que llegaron fueron esencialmente *Mergers & Acquisitions*, capitales que vinieron a hacerse cargo de los servicios públicos privatizados en los años noventa, gozando de todas las protecciones de los TBI firmados por Argentina con sus países de origen.

Hoy numerosos estudios muestran que no existe una relación causal entre la firma de TBI y el aumento del flujo de inversiones hacia los países firmantes. Se ha demostrado que los inversores han mirado otras cuestiones más relevantes que la existencia de TBI, como el tamaño de la economía, el desarrollo del mercado interno, el precio de la mano de obra, etc. Esencialmente, la capacidad de generar ganancia en el país receptor. Esto hace que los instrumentos firmados por los países puedan ser cuestionados, ya que se cedió soberanía a cambio de un beneficio que nunca llegó.

Los tratados no provocaron la llegada de inversiones, pero sí tejieron una red de protección legal para los capitales extranjeros que se cristaliza esencialmente en el *mecanismo de solución de controversias inversor-Estado* (ISDS por su sigla en inglés). Esto permite a las empresas transnacionales recurrir a la “justicia internacional”, que es privada y está fuera de los territorios nacionales, frente a cualquier medida de los Estados que consideren expropiatoria. Los argumentos de las corporaciones suelen ser la violación de cláusulas incluidas en los tratados, como las de Trato Nacional (de los capitales extranjeros frente a los nacionales), Trato Justo y Equitativo (que no se discriminará ni regulará de ningún modo las inversiones), y el de Expropiación Indirecta (sobre las ganancias esperadas, aún no realizadas, de las empresas).

Las demandas ISDS se han multiplicado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos conocidos bajo tratados en 1995, a 696 casos conocidos hoy en día, en su mayoría presentados en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). Solamente en el 2015 se entablaron 70 nuevos casos de demandas inversor – Estado en base a TBI. En el caso de los países latinoamericanos, estos representaban en 2015 cerca del 35% de las demandas en el CIADI, de los cuales Argentina, México, Ecuador y Venezuela han sido los más demandados. Muchas de las demandas contra países latinoamericanos han sido presentadas a partir de la implementación de regulaciones en favor del interés público o del medioambiente, lo cual muestra el efecto nocivo (*chilling effect*) que tiene el sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional sobre las legislaciones nacionales.

Gran parte de las demandas han detonado en uno de los sectores económicos donde se concentran las inversiones extranjeras: el *sector extractivo*, como el petrolero y el minero. En el sector petrolero, el país más afectado ha sido Ecuador, que está siendo obligado a pagar 1,000 millones de dólares más intereses a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) por haber cancelado un contrato de operaciones en 2006. El mismo país también ha sido sentenciado a pagar 700 millones de dólares a la también estadounidense Chevron, empresa que fue demandada por las comunidades locales por el daño ambiental causado en la zona amazónica a partir de explotaciones petroleras descontroladas. Chevron no sólo desconoció el fallo de la justicia nacional en su contra, sino que llevó al Ecuador al arbitraje internacional debido a la rescisión de su contrato.

Por otra parte, el sector minero es uno de los más candentes en la actualidad. Diversas empresas extranjeras han presentado demandas contra los Estados debido a la rescisión de los contratos o la denegación de permisos de explotación de las minas. Por ejemplo, la empresa norteamericana Dominion Minerals ha demandado a Panamá por 268 millones de dólares por el retiro de una concesión para la explotación minera debido al rechazo de su operación por parte de grupos indígenas y por razones de protección del medio ambiente. Lo mismo sucedió con la minera canadiense Bear Creek, que demandó al Perú por 1,200 millones de dólares, debido a que en 2011 el Estado le rescindió el contrato para operar el Proyecto minero de Santa Ana, tras la realización de protestas para la protección del medio ambiente que desembocaron en el asesinato de varios manifestantes. Actualmente, también Colombia enfrenta la amenaza de nuevas demandas por tres empresas mineras: Eco Oro Minerals y Cosigo Resources (Canadá), y Tobie Mining and Energy Inc. (EEUU), debido a la denegación de permisos de explotación tras las protestas generadas por la población indígena y organizaciones ambientalistas.

<http://nuso.org/articulo/america-latina-y-el-poder-corporativo/>

El final del progresismo

No se debe confundir el agotamiento del potencial transformador positivo del progresismo y el final de su ciclo político en América Latina. La izquierda pagará caro las oportunidades desperdiciadas durante la última década.

Eduardo Gudynas tiene razón: una cosa es el agotamiento del potencial transformador positivo del progresismo y otra el final de su ciclo político. No podemos afirmar con certeza que el ciclo haya terminado. Nicolás Maduro podría ganar milagrosamente el revocatorio y la reelección; el Movimiento al Socialismo (MAS) podría volver a superar a sus desgastados rivales en la elección de 2019 en Bolivia; el correísmo podría imponerse frente a sus fragmentados desafíos electorales a izquierda y derecha en febrero de 2017

en Ecuador; el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) salvadoreño podría superar el trauma del inesperado y apretadísimo resultado de 2014 y permanecer en palacio después de 2019. Al fin y al cabo, el Frente Amplio lo consiguió en Uruguay hace menos de dos años. El destino electoral del kirchnerismo o del lulismo no dibuja el futuro de todos los demás.

No es tanto que los variados perfiles de los movimientos políticos progresistas sean distintos. Lo son. El Frente Amplio, el PT y el FMLN son partidos poderosos, con reglas de funcionamiento consolidadas y un apoyo electoral asentado cuyas estructuras sin duda perdurarán en el mediano plazo. Son partidos de centro izquierda con un peso electoral propio que puede reducirse pero difícilmente desaparecer. No podemos estar tan seguros del futuro del chavismo, el kirchnerismo o el correísmo. Su surgimiento fugaz e imprevisible desgarró el sistema de los partidos tradicionales y el porvenir puede depararles un final tan abrupto como su nacimiento. El fin del kirchnerismo, no tendría por qué arrastrar a su abismo a un peronismo infinitamente maleable, pero obligaría a buscar reagrupamientos políticos nuevos incluso dentro del movimiento. En estos casos, mucho más dependientes de irrepetibles figuras caudillescas, no extrañaría un porvenir de interminables subdivisiones por mitosis una vez desensillados de la montura gubernamental.

Lo realmente decisivo no es ese juego de variantes circunstanciales sino que el agotamiento del proyecto de transformaciones llegó antes del final del ciclo político. No es la primera vez que sucede algo así. Para herir de muerte un proyecto jamás fue indispensable desplazar a sus dirigentes o a sus partidos. Los nacionalismos populares de mediados de siglo no necesitaron el entierro de sus movimientos políticos para asesinar su proyecto original. Los casos de Víctor Paz Estensoro o Carlos Andrés Pérez, transfigurados en menos de dos décadas entre su primera y su segunda encarnación, son sin lugar a dudas los giros ideológicos más impactantes. Pero la operación transformista del menemismo, asentado en el mismo partido que inventó la más radical reforma social de la historia argentina, no tiene mucho que envidiar a sus pares bolivianos o venezolanos. ¿Hay alguna continuidad discernible entre el sandinismo orteguista y el que nos entusiasmó con la hazaña de su ética, su entereza y generosidad para desalojar a una de las dictaduras más infames de un continente plagado de infamias? Quizás sin el dramatismo de sus antepasados, el agotamiento del progresismo latinoamericano contemporáneo incluyó capitulaciones semejantes.

Aunque agotamiento y fin de ciclo deben distinguirse (ambos nos remiten al mismo límite estructural que en último término los condenó) subyace a ellos un sustrato común. El auge del precio de las materias primas y la bonanza latinoamericana de inicios de milenio fueron la condición básica de posibilidad del proyecto de equilibrismo político progresista. Les ofreció la oportunidad de repartir algo a los marginados de la liberalización, a esas masas exhaustas y descontentas por los años incontables de cinturones apretados, sin tener que afectar el modelo económico que heredaron. Distribuir abajo sin afectar arriba. Con el marchitamiento del espejismo dorado de los BRICs, los progresismos se vieron obligados a enfrentar la disyuntiva hasta entonces eludida. Casi sin excepción, la opción fue clara. Por eso, el fin de la bonanza económica no solo hizo evidentes los límites de sus programas de cambio económico y político sino que erosionó parte de su atractivo electoral. A la inflación, la penuria fiscal, el ajuste más o menos forzado y en casos extremos, la escasez, se le sumaron concesiones cada vez más grandes a aquellos poderosos grupos económicos cuyo poder nunca quisieron afectar.

En verdad, aunque las derrotas y los debilitamientos de la base política del progresismo tienen muchas causas variadas y diversas, la crisis económica figura de manera prominente entre ellas. Así, si el agotamiento vino antes y nació de las limitaciones mismas de los proyectos políticos que impulsaban y de la naturaleza de los grupos que terminaron por liderarlos, durante la bonanza podían maquillarse y a veces

acompañarse de guiños limitados y algunos fondos públicos para el ensayo de auténticas alternativas. Casi todo el cosmético se acabó frente a la desmaquilladora inflexible de la crisis económica: la previa descomposición de los tímidos proyectos de redistribución se está acompañando, de manera heterogénea, de un desgranamiento más o menos profundo de su base electoral y sus apoyos políticos.

Aunque el porvenir es largo, la factura inmediata por esta oportunidad desperdiciada por las izquierdas del continente habrá de pagarse. Pero además, en los tiempos difíciles que se anuncian, habremos de desmentir el conocido aforismo de Hegel: «La historia nos enseña que las personas jamás aprendieron nada de la historia».

<http://nuso.org/articulo/el-fin-del-progresismo/>

El reformismo progresista

Los progresismos latinoamericanos avanzaron tímidamente en reformas hacia la construcción de una sociedad alternativa. Sus expectativas iniciales eran, sin embargo, mucho más ambiciosas.

En gran parte, los progresismos latinoamericanos parecieron ser un paso, a veces pequeño, pero paso al fin, hacia una sociedad alternativa porque eran una expresión gubernamental de potentes movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo. No en todos lados había tales movimientos y no en todos lados eran potentes, pero destacaban los casos de Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador. La correspondencia no siempre fue perfecta pero su mera coexistencia sugería la posibilidad de recorrer el estrecho sendero del fortalecimiento mutuo.

Si el sendero se perdió en el viaje de la última década, el veredicto final no implica que los progresismos carecieran de significado para el cambio social. Su sentido último puede entenderse mejor en el marco del generalizado corrimiento hacia la derecha que sufrió el mundo en el cambio de siglo. Al empuje del neoliberalismo, primero instalado en los países anglosajones, luego extendido por todo el planeta de la mano de las políticas de ajuste, se sumó la estrepitosa caída de los modelos estatistas del socialismo real. Uno de sus productos más sobresalientes fue hacer que lo más radical a lo que cualquier alma sensible a las injusticias e irracionalidades del modelo económico podía aspirar era lo que quedaba de las experiencias escandinavas, ellas mismas arrinconadas por presiones recrudescidas.

Resultado: hoy en día los moderados programas de Bernie Sanders parecen un inaudito radicalismo, impensable en el sistema político norteamericano. Inversamente, las histéricas acusaciones de comunismo que recibe Barack Obama de parte del Tea Party, tienen su correlato en los gritos destemplados de la Folha de São Paulo contra el lulismo, y en las demenciales acusaciones de El Nacional contra el totalitarismo bolivariano. Cualquier mínima señal de controles estatales a la ciega sabiduría de las fuerzas del mercado, aparece como reedición de recetas comunistas fracasadas. Si frente a las políticas económicas planea la acusación de populismo, en el campo de los derechos civiles, los progresismos adquieren el perfil de totalitarios, nazis o stalinistas. En realidad, comparados con cualquier récord conocido de atrocidades mayúsculas, las restricciones a las libertades públicas en los progresismos han sido minúsculas. Inexistentes en Argentina o Brasil, llenas de inaceptables hostigamientos, presiones y acosos judiciales en Ecuador y Venezuela. La única correspondencia discernible entre las delgadas realizaciones de los gobiernos progresistas y el tono de las denuncias de los defensores del orden establecido proviene del ambiente crudamente conservador que ha dominado el escenario mundial del último cuarto de siglo.

Lo que en realidad hicieron los gobiernos progresistas fue volver a conectar las experiencias políticas de sus respectivos países con las tradiciones nacionalistas de mediados del siglo XX. Tradiciones que habían quedado sepultadas, pero todavía vivas, bajo el vendaval de la liberalización de los mercados, la fragmentación social y la acentuación de las desigualdades. Aunque las políticas concretas del kirchnerismo no resisten la comparación con la radicalidad de las del peronismo, ni la reforma agraria de 1953 se parece remotamente a la insípida titularización de tierras patrocinada por Evo Morales, las conexiones simbólicas entre ambas épocas las acercan. El progresismo latinoamericano fue la reivindicación de «algo», aunque fuera poco, frente a la «nada» que dominó los años de reacción conservadora.

Ese «algo» fue detener el ritmo de las privatizaciones, en muy pocos casos revertirlas, aumentar la presencia estatal y los servicios sociales básicos, ampliar los beneficiarios de los programas de subsidios focalizados. Destaca el esfuerzo por ampliar el acceso a la educación básica gratuita y en algunos casos a democratizar el ingreso a la universidad. En síntesis, una administración con rostro humano de la prosperidad provocada por el auge de los precios de las materias primas. La desigualdad de ingresos en la región más desigual del mundo se redujo levemente, aunque fue una reducción generalizada en América latina, por lo que es difícil percibir diferencias sustanciales entre los países de gobiernos progresistas y neoliberales. Así, la desigualdad de ingresos entre el año 2000 y el 2013, según reportes del Fondo Monetario, bajó casi exactamente lo mismo en Colombia y Brasil, dos de los países más desiguales del mundo.

Nada parecido a las políticas de industrialización de sus ilustres antepasados desarrollistas por no hablar de la redistribución de activos productivos como las reformas agrarias. Mientras Bolivia y Ecuador diseñaron programas de industrialización sobredimensionados y pronto olvidados, en Venezuela la vieja promesa de «sembrar el petróleo» se abandonó aun más rápidamente. En su lugar quedaron inversiones en infraestructura y el diseño de dudosas «ciudades del conocimiento» inspiradas en una mala copia del modelo coreano de desarrollo. Lo más radical en cuanto a políticas económicas industrialistas fue negativo: reducir el entusiasmo en la firma de tratados de libre comercio. Aunque Bolivia y Venezuela no han firmado ninguno, en Ecuador los gestos iniciales de abandono de las negociaciones del TLC con Europa fueron sustituidos en 2015 por la adhesión tardía a los textos aprobados por Perú y Colombia. Con el fin del superávit de las exportaciones, termina también, como en el siglo pasado, el empuje reformista.

Algo siempre es mejor que nada. Pero estamos a años luz de las expectativas iniciales de reforma. Es probable que la mejor explicación para esta voluntaria limitación del ímpetu reformista del progresismo se encuentre en una débil presión desde abajo. Aquellos movimientos que resistieron activamente las reformas neoliberales en los noventa se debilitaron mientras los gobiernos se fortalecían. Cambios estructurales en sus bases de apoyo y políticas de neutralización desde el Estado se combinaron exitosamente para reducir cualquier exigencia de más.

<http://nuso.org/articulo/el-reformismo-progresista/>

Brasil: la mafia al gobierno, el mercado al poder

Si al gabinete de Temer le faltan mujeres y negros, puede decirse que le sobran condenados, procesados e investigados

Ninguna imagen podría reflejar mejor lo que está sucediendo en Brasil que la primera foto de familia del presidente interino Michel Temer con su gabinete: recién salida del túnel del tiempo, la imagen es el retrato perfecto de la «casa grande», de la vieja oligarquía que festejaba la recuperación absoluta de un poder del que nunca fue desplazada del todo pero que ahora no deberá compartir con nadie. Por primera vez desde la dictadura militar, no había ninguna mujer, ninguna persona de piel negra, ningún trabajador. Los nuevos ministros forman un grupo homogéneo de señores mayores, ricos, blancos, cristianos, conservadores, terratenientes, gerentes de bancos y empresarios con pocos cabellos, casi ninguna barba, algunos pocos bigotes de estilo militar, varias causas por corrupción, trajes caros y muchas corbatas repetidas.

Teniendo en cuenta los datos del último censo, el economista Bruno Mandelli calculó que la probabilidad estadística de seleccionar aleatoriamente 23 ciudadanos brasileños (el número de ministros designados en su primer día de gobierno por Temer) y que todos sean varones es de una en ocho millones. Que todos sean varones y blancos, una en 64 billones. Pero en Brasil pasan esas cosas: el diputado Fernando Lúcio Giacobbo, del evangélico Partido de la República, que ocupa la vicepresidencia de la Cámara y votó a favor del *impeachment* de Dilma Rousseff, dice que ganó la lotería 12 veces seguidas. Giacobbo ascendió a vicepresidente cuando Waldir Maranhão (otro con más prontuario que currículum), tuvo que ocupar la presidencia porque el anterior presidente, Eduardo Cunha, aliado de Temer («Las tareas difíciles se las encargo a Cunha», había declarado el presidente interino) y principal impulsor del juicio político a Rousseff fue apartado del cargo por decisión unánime de la Corte Suprema. Cunha está procesado por corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión fiscal, y la justicia suiza informó a la brasileña que tenía cuentas bancarias no declaradas en ese país con millones de dólares que no puede explicar de dónde salieron. Delatores de la operación «Lava jato» lo acusaron de haber recibido 52 millones de reales (casi 15 millones de dólares) de coimas en 36 cuotas en apenas uno de los casos en los que está siendo investigado. Cunha llegó a la presidencia de la Cámara derrotando a los candidatos del oficialismo y la oposición de derecha, apoyado por el «bajo clero» parlamentario y los bloques evangélico, ruralista y de la «mano dura», gracias a las generosas donaciones de campaña que negociaba para diputados de diferentes partidos como lobista de empresas y corporaciones. El lavado de dinero de la corrupción lo hacía a través de iglesias evangélicas y empresas *off shore* en paraísos fiscales. Llegó a la cima del poder en los años 90 con PC Farias, el cajero de Collor de Melo, fue el principal arquitecto político del golpe contra Dilma y ahora está a un paso de ir preso.

Si al gabinete de Temer le faltan mujeres y negros, puede decirse que le sobran condenados, procesados e investigados. Siete de los veintitrés están citados en el expediente Lava jato, sospechados de haber recibido coimas de empresas constructoras. No alcanzan los caracteres de esta nota para detallar el prontuario completo del equipo del presidente interino, así que daremos apenas algunos ejemplos.

El jefe de gabinete, Eliseu Padilha, está acusado por el Ministerio Público por ordenar pagos por dos millones de reales (560.000 dólares) con sobrepagos a una empresa cuando fue ministro de Transportes de Fernando Henrique Cardoso. «Tratamos de buscar mujeres para el gabinete, pero no fue posible», fue una de sus primeras declaraciones a la prensa tras asumir su nuevo cargo. El ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, aparece en conversaciones telefónicas de Cunha con el presidente de la constructora OAS, grabadas por la justicia, mencionado como beneficiario de coimas y también fue delatado por el

«arrepentido» Paulo Roberto Costa, exdirectivo de Petrobrás, con quien se reunió varias veces según los registros de la empresa. A fines del año pasado, la Policía Federal allanó su vivienda.

Investigado por la Corte a pedido de la Procuración General de la República, el ministro de Planificación, Romero Jucá, uno de los hombres más cercanos a Temer, fue acusado por el presidente de la constructora UTC de haber pedido a la empresa un millón y medio de reales (unos 420.000 dólares) por la adjudicación de la construcción de una usina nuclear. También está acusado de recibir otros quince millones de reales (4.200.000 dólares) de coima en otro caso, investigado en el marco de la operación «Zelotes» de la Policía Federal. Pero a poco de asumir, Jucá tuvo que renunciar por una grabación divulgada por la *Folha de São Paulo* en la que se lo escucha negociando, antes de la votación del *impeachment* de Rousseff, un acuerdo para acabar con las investigaciones del *petrolão*: «Hay que cambiar el gobierno y parar esta sangría», dice claramente. En otra parte del diálogo con un exdirectivo de Petrobras, Jucá asegura que conversó con jueces de la Corte, con generales de las Fuerzas Armadas y con Temer y que la única forma de parar las investigaciones era destituyendo a la Presidenta y haciendo un «pacto nacional» para «parar todo». Y agrega: «Mientras Dilma esté ahí, esta *porra* no termina nunca». Se acusaba a la presidenta suspendida de no presionar a la policía y a los fiscales y permitir que investiguen a la clase política. El acuerdo era poner a Temer en su lugar y proteger a todos los políticos investigados.

Al flamante secretario de Gobierno de la Presidencia, Geddel Vieira Lima, la Policía Federal lo investiga por negociar coimas con la constructora OAS. En el celular de un directivo de la empresa que está detenido aparecen varios mensajes de texto intercambiados con el ministro negociando contratos y comisiones. Bruno Araújo, el diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centroderecha) que dio el voto número 342, decisivo para el inicio del juicio político a Dilma, fue premiado por Temer con el Ministerio de las Ciudades. Y también está siendo investigado: su nombre aparece en la planilla que la «gerencia de coimas» de la constructora Odebrecht usaba para registrar los pagos a políticos, secuestrada en un allanamiento en la sede de la compañía. También aparece en esa lista el nuevo ministro de Salud, Ricardo Barros, condenado en 2001 por la justicia por fraude al Estado cuando era intendente de su ciudad. Y también el nuevo Ministro de Educación, Mendonça Filho, exdiputado del derechista Demócratas (DEM), partido heredero del viejo Alianza Renovadora Nacional (ARENA), fundado por los partidarios de la última dictadura militar. En 2009, Mendonça Filho fue investigado en el marco de la operación «Castelo de Areia» de la Policía Federal por haber recibido 100.000 reales (28.000 dólares) de la constructora Camargo Corrêa. Condenado por el desvío de 133 millones de reales (37 millones de dólares) de los comedores escolares de Alagoas cuando era ministro de Educación de ese estado, Mauricio Quintella fue elegido por Temer para el Ministerio de Transportes. La lista podría seguir.

<http://nuso.org/articulo/brasil-la-mafia-al-gobierno-el-mercado-al-poder/>

La encrucijada de la izquierda brasileña

El PT y sus aliados han convertido su fracaso en un muro que impide la construcción de una alternativa de izquierda. La trampa es esta: luchar contra Temer a favor de Dilma no es sino reproducir el apoyo que en su momento se dio a Dilma con Temer.

¿Cómo plantearse lo que está ocurriendo en Brasil? Ante un desastre tan grande, no sabemos cómo abordar la cuestión: si en términos de crisis económica, de crisis política, o incluso de crisis moral. Se nos presenta el desafío de lograr que esta encrucijada se vuelva inteligible y nos permita señalar algunas líneas

de fuga. Es una situación de parálisis que reconoce dos dimensiones: la del país como un todo, hundido en una grave depresión económica y con su sistema político inmerso en una crisis vertical, y la parálisis de las fuerzas «progresistas» o, en términos más generales, de la «izquierda». Y no es fácil decidir cuál de esas dos dimensiones es peor. La serie de protestas de junio de 2013 decretaron el fin de la izquierda de gobierno y de su coalición oxidada. Pero el PT, que contaba con una poderosísima maquinaria de propaganda, con miles de empleados y cientos de millones desviados de las arcas públicas, logró hacer pasar su agonía por una irónica *lucha de principios* en defensa... de su *falta de principios*. Obviamente esa batalla, a la cual adhirieron casi todos los movimientos sociales «organizados» así como el arco del progresismo universitario y prácticamente la totalidad de los sectores y grupos de izquierda, sólo podía perderse, y a esta altura ya se transformó en un suicidio colectivo de la izquierda brasileña. El resultado es paradójico: el PT y sus aliados han convertido su fracaso en un muro que impide la construcción de una alternativa y nos deja como legado la manifestación explícita de lo que su gobierno de coalición *ya incluía* (el presidente interino, Temer). La trampa es esta: luchar contra Temer a favor de Dilma no es sino reproducir el apoyo que en su momento se dio a Dilma *con* Temer. Son las dos caras de una misma moneda: falsa. «Golpistas» y «golpeados» son ambos ilegítimos: cómplices y responsables, los dos, de la crisis. Las luchas de resistencia se encuentran hoy ante el gran desafío de afirmar esta verdad: o ellas son capaces de acuñar una nueva moneda, o no están en condiciones de sostenerse. Dicho de otro modo, hoy las luchas necesitan oponerse al mismo tiempo al PT de Dilma-Lula y al PMDB de Temer-Cunha. Temer y Dilma son el *Pokémon Go* uno del otro: ambos encarnan la negación de la brecha democrática. Cualquier movilización que tienda a verlos como opuestos lo que hace es mistificar la verdadera lucha y avalar el proyecto de reforma neoliberal como única salida a esta situación de parálisis. No por casualidad, pese al apoyo de los grandes medios a la estrategia de Temer, la mayoría de la población reclama hoy que se llame a *nuevas elecciones generales*.

No hubo —y no está habiendo— ningún golpe en Brasil. Esto no es algo que uno diga para dar un cuadro más ameno de la situación ni mucho menos para banalizar la destitución de la presidenta electa. Lo que hubo y está habiendo es una tentativa de reajuste *al interior* del bloque de poder. La cual reconoce dos causas que la determinaron y dos grandes objetivos.

El primer determinante fueron las protestas de junio de 2013: las manifestaciones en el área metropolitana en contra del régimen mafioso de gestión del sistema de transporte público se transformaron rápidamente en una revuelta general contra el conjunto de los representantes, lo cual incluyó intentos casi insurreccionales de ocupar los parlamentos en Brasilia y Río de Janeiro (entre los días 17 y 20 de junio), ocupaciones concretas de 30 parlamentos y concejos deliberantes estaduais (durante julio y agosto en todo el país) y acampes extendidos hasta el mes de octubre frente a la residencia del gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Hombre del PMDB e importante aliado de Lula y Dilma, Cabral había sido fotografiado en 2012 junto con miembros de su equipo de gobierno y con un empresario hoy preso, todos de fiesta en un lujoso hotel parisino, divirtiéndose y bailando con sus cabezas enfundadas en servilletas de tela. Era la foto emblemática de la fiesta en que se había convertido el proyecto de poder del PT y el PMDB sobre el modelo base de la ciudad que pronto sería sede del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Luego la multitud salió a las calles, pero a esa altura el *Titanic* ya no podía cambiar de rumbo. Y así ocurrió que el PT, a la manera del «partido del orden» en que se había transformado, enfrentó las protestas democráticas por medio de dos recursos: la organización de la represión y el refuerzo de su coalición con el PMDB para ganar las elecciones de octubre de 2014. La policía y el poder judicial del Estado de Río de Janeiro que Cabral gobernaba (como también las del Estado de San Pablo, gobernado por la oposición) lograron con la ayuda de los grandes medios de prensa pacificar la situación para que el Mundial pudiese llevarse a cabo. Fue una restauración exitosa, y todavía más exitosa fue, en 2014, la campaña electoral. La

propaganda del PT logró entonces polarizar el debate y deconstruir la candidatura de Marina Silva, que durante cierto tiempo había asomado como la eventual triunfadora. Tal éxito, sin embargo, tuvo un precio mucho más alto que el de las coimas repartidas entre consultores y agentes de marketing. No sólo porque desembocó en detenciones y cárcel, sino ante todo porque, para sustentar esa polarización contra la candidata Silva, la estrategia de discurso del PT requirió potenciar al cubo las mentiras: «La reelección de Dilma es un guiño a la izquierda», «Dilma no tendría ninguna necesidad de ajustar y aunque la tuviera no lo haría». El despliegue de actos y reuniones con intelectuales de izquierda munidos de banderas rojas se encargó del resto. Pero lo cierto es que, una vez reelecta, al día siguiente Dilma ya estaba encarando una política económica diametralmente opuesta a la anunciada en su campaña (suba de tasas, tarifazos, recortes de derechos, gobiernos estaduais en quiebra) demostrando así que el país estaba en bancarota. Para colmo, Dilma anunciaba un elenco ultraconservador de ministros, con énfasis en un *Chicago Boy* a cargo de la cartera de Hacienda y una tétrica representante de los agronegocios al frente de Agricultura. La caída de Dilma estaba dada por la imposibilidad de revertir toda esa mistificación electoral de la campaña; fue una caída que, paradójicamente, el mismo éxito del marketing del PT aceleró. De ese modo, el «ajuste» que Dilma y Lula arriesgaron era el peor que podían emprender: un *ajuste desajustado*, donde la recesión daba lugar a la depresión (-10% del PIB per cápita), ya que aquello no era creíble para nadie. Asimismo, mientras la «izquierda organizada» se retiraba de las calles, la multitud siguió manifestando sólidamente su indignación en 2015 y 2016, esta vez en base al accionar de nuevos grupos liberales o de derecha formados en las redes sociales.

El segundo determinante fue la movida judicial contra la corrupción (el famoso caso «Lava Jato»). Apoyándose en la legitimidad de las protestas de junio, la Corte de la Ciudad de Curitiba encaraba una serie de detenciones, procesamientos y condenas de propietarios y directivos de las principales empresas de la construcción, que involucraban también a los directivos de Petrobras y a los economistas y lobbistas del PT, el PMDB y el PP. A comienzos de 2016, los sumarios judiciales tocaron de lleno a los «políticos» y el gobierno quedó paralizado. El traslado forzado a interrogatorio del ex-presidente Lula fue la señal de alarma. A diferencia del PT, que en su campaña había condenado la «selectividad» del juez Sergio Moro, los caciques del PMDB e incluso de la oposición eran concientes de que la movida implicaba a toda la «casta» política. La medida de la destitución (*impeachment*) surgió como tentativa extrema de tomar el control de gobierno de cara a su propia parálisis.

Superficialmente, la destitución de Dilma se fundó en el objetivo de acatar el clamor de la calle y de la «opinión pública» (los grandes medios). Pero los objetivos reales de Temer son dos: enfrentar la crisis económica y –valiéndose de un apoyo parlamentario más cohesivo y de una eventual recuperación en los índices de crecimiento– poner un freno al «Lava Jato» y asegurar «protección» a todos los miembros de la casta, Lula incluido. La destitución de Dilma fue algo casi «necesario»: por un lado, la Policía Federal tocando el timbre en las casas de los políticos; por otro, la depresión económica dando la nota en los balances de las grandes empresas como Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Oi (la principal empresa de telefonía) y Gol (la aerolínea más grande del país), sin hablar de la «situación calamitosa» – oficialmente reconocida– del Estado de Río de Janeiro tras las inversiones que exigiera la realización de los Juegos Olímpicos.

Y si hay algo que se presenta como la principal legitimación para las reformas neoliberales que Temer se propondrá implementar apenas sea confirmado como presidente (reformas en el sistema previsional y en las leyes laborales, sumadas al absurdo proyecto de establecer un tope anual al gasto público), no es otra cosa que la tremenda crisis en la que se encuentra el país, crisis generada por el PT tanto como por el

PMDB, por Dilma lo mismo que por Temer. La legitimidad de este último proviene paradójicamente del discurso petista que lo pone al frente de un golpe y hace de Temer una fuerza política opuesta cuando en realidad es aliada y corresponsable del fracaso del PT. La lucha contra Temer y sus reformas requerirá que sea una lucha contra el PT de Lula (y de Dilma), o de lo contrario no estará a la altura del desafío actual. La urgencia democrática sigue así el dibujo de una línea de fuga por fuera de ese falso binarismo. Y es algo que podría exigir, tal vez, el abandono de la noción misma de izquierda.

Traducción: Cristian De Nápoli

<http://nuso.org/articulo/la-encrucijada-de-la-izquierda-brasilena/>

Brasil: la crisis de un proyecto nacional y regional

¿Qué supone el fin del ciclo de gobiernos del Partido de los Trabajadores (pt) en Brasil para la realidad política de la región? En estos días, algunos medios brasileños recuerdan la frase que el hoy canciller José Serra pronunció en marzo de 2015 en el Senado de Brasil: «El Mercosur fue un delirio megalomaniaco». Y, de mantenerse en el cargo, el nuevo gobierno de Michel Temer anuncia cambios geopolíticos respecto de la integración sudamericana debido al fuerte peso de Brasil en la región, junto con las redistribuciones internas de poder entre diferentes grupos sociales.

El impacto político de la suspensión de Dilma Rousseff altera radicalmente no solo la política interna brasileña, sino también toda la dinámica regional sudamericana de la última década. Se trata de algo que ya sabíamos: así como la durabilidad del gobierno del Partido de los Trabajadores (pt) había funcionado todos estos años como un gran paraguas protector de los demás procesos políticos progresistas en la región, su salida del gobierno proyecta el mismo poder de fuego en un sentido inverso. A partir de la destitución de Rousseff, tanto el «moderado» Tabaré Vázquez en Uruguay como el «radical» Nicolás Maduro en Venezuela pierden un apoyo clave para sostener sus respectivos proyectos políticos. Por el contrario, las oposiciones de derecha se entusiasman ante lo que juzgan, con razón, una oportunidad de oro para retornar velozmente a las presidencias después de un largo ciclo de «arar en el mar».

La razón del cimbronazo regional es, en primer lugar, aritmética. Brasil representa la mitad del pib regional, es el único país de América Latina con aspiraciones concretas de potencia mundial y tiene un desarrollo industrial que sus vecinos solo pueden ver desde varios escalones abajo, cuando no desde una lejanía monoprotectora de soja, carne o leche. A fines de 2011 se había convertido en la sexta economía del mundo y había desplazado al séptimo lugar al viejo imperio británico. El peso específico de Brasil habla por sí mismo. ¿Qué pasaría si el nuevo gobierno sin votos de Michel Temer decidiera renegociar a la baja el precio del gas con Evo Morales, o reducir al mínimo la presencia comercial y empresarial en Venezuela –que actualmente abarca desde la exportación de carne hasta la ampliación del subterráneo de Caracas–? En términos no económicos: ¿qué pasará con el grado de autonomía soberana alcanzado en la región si, como todo hace suponer, la cancillería de Itamaraty abandonara su reciente rol como representante sudamericano frente a Estados Unidos, para convertirse en el representante norteamericano en América del Sur?

Antes de continuar, es necesario enmarcar el contexto de este cambio. El impeachment contra Rousseff debe ser calibrado en su gravedad: el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (psdb) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (pmdb) –ex-aliado del pt y de donde proviene Temer– juntaron fuerzas en el Congreso para llevar adelante un juicio político jurídicamente absurdo y políticamente

deshonesto, en tanto desconoce abiertamente el mapa del voto ciudadano de fines de 2014. Pero además, si las razones para el juicio político a Rousseff fueran ciertas, el hasta ahora vicepresidente y actual presidente en funciones Temer debería encauzar un gobierno técnico que se corriera lo menos posible de la plataforma que lo llevó a ubicarse en la línea sucesoria. Por el contrario, Brasil asiste a un «volantazo» político-ideológico de 180 grados, con un cambio total de los ministros, el ingreso de notables figuras opositoras –como el dos veces candidato presidencial José Serra– y un cambio significativo en la orientación de las políticas públicas. A modo de ejemplo: el nuevo ministro de Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra, anunció por televisión su intención de pasar «un peine fino» en el programa Bolsa Família y dejar afuera hasta a 10% de los beneficiarios. Y todo esto, sin que medie el voto ciudadano.

Surgimiento, auge y crisis de una dinámica regional

El jueves 2 de enero de 2003, un día después de asumir como presidente, Luiz Inácio «Lula» Da Silva tuvo el primer encuentro formal con otro jefe de Estado en el Palacio del Planalto. Esa primera cita fue con Hugo Chávez, quien hasta ese momento no tenía ningún aliado en todo el continente, con la excepción simbólica de Cuba. Pocos meses después, Lula y Chávez se volvieron a encontrar en Buenos Aires para saludar al nuevo presidente Néstor Kirchner. Y luego vendrían las elecciones en Bolivia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. En menos de cuatro años, los habitantes de América del Sur –con la excepción de Colombia y de Chile durante el periodo de Sebastián Piñera– pasaron a estar gobernados por líderes de izquierda, centroizquierda o «nacional-populares». Fue un cambio veloz, en simultáneo, pero sin articulación. Casi en ningún caso los líderes se conocían antes de ser presidentes. Las segundas líneas y las fuerzas políticas, menos aún. A pesar de lo que puede sugerir la imagen de las fichas de dominó, cuando una impulsa la caída de la siguiente, en el caso del cambio político en América del Sur habría que buscar ese motor dinámico en el agotamiento, cuando no crisis, de los modelos neoliberales, antes que en la coordinación de las fuerzas progresistas.

Lo que esto nos marca es que prácticamente toda la articulación política regional que cobró fuerza a partir de 2005 y se extendió durante una década más fue un ensayo a puertas abiertas, una dinámica política experimental, en la cual los actores iban reconociendo afinidades, similitudes e intereses comunes, aun a pesar de tener orígenes disímiles. Sin embargo, nada de esto impidió que estos líderes hicieran propio un inédito programa de integración política regional. Si los resultados pueden matizarse, la voluntad de construir puentes diplomáticos y de articulación política fue notoria. Como muestra basta un botón: si recién en 2000, por primera vez en la historia, tuvo lugar una reunión de presidentes de América del Sur, para 2014 existía un organismo regional propio –la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)– en cuyo marco se habían realizado ocho cumbres presidenciales.

Esta verdadera invención diplomática no podría haber sucedido sin el empuje brasileño. De hecho, el acta constitutiva de la Unasur se firmó en Brasilia en 2008. Pero las huellas son más lejanas: aquella reunión iniciática de 2000 había sido promovida por el antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso. Ese embrión integracionista, con mucho menos ropaje ideológico y simbólico, tenía la virtud de dejar ver los intereses del gigante sudamericano con mayor facilidad: en un contexto de hegemonía neoliberal y donde el final del camino parecía el ingreso en el Área de Libre Comercio de las Américas (alca), Cardoso había logrado juntar por primera vez a sus pares para darle vida a un ambicioso proyecto de conectividad económica y logística, la famosa iirsa (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana). La iirsa, que luego se convertiría en el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de Unasur (Cosiplan), ya como parte de la Unasur, puede definirse como un conjunto de grandes obras de infraestructura (carreteras,

puertos, usinas, centros de acopio y distribución, etc.) cuyo objetivo es lograr la interconexión de una región que, históricamente, solo miró desde cada puerto nacional a los mercados internacionales.

«La expansión de Brasil sobre su propia región» podría ser el título escrito en tinta limón de los proyectos de la iirsa. Desde su constitución hasta nuestros días, el principal financista de las obras no fue otro que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (bndes) y los brazos ejecutores, las grandes firmas constructoras privadas, también brasileñas. Desde cierta crítica de izquierda, todo este andamiaje fue visto como una desfiguración de lo que debería ser un verdadero programa de integración continental (la «integración de los pueblos»), tanto por su carácter mercantil como por cierta impronta «subimperialista» de su principal jugador.¹

Sin embargo, creemos que, para bien y para mal, se trata de la materialidad posible para lo que fue, hasta ahora, el único proyecto de integración regional que tenemos en los registros históricos modernos. Con la excepción de Chile y Ecuador, Brasil limita con todos los países sudamericanos y tiene bajo su control el corazón amazónico del continente. Ahí están las condiciones de posibilidad de cualquier proyecto integrador que no se agote en el *consignismo* ideológico. El recorte al mundo sudamericano, y no ya latinoamericano, también fue un cálculo brasileño, que de esa manera no solo quitaba del medio a un posible competidor de peso (México), sino que aceptaba la irreversibilidad de la actual penetración estadounidense en América Central y buena parte del Caribe.

Tres fotos históricas pueden ilustrar el surgimiento, auge y crisis del proceso de integración regional y el papel desequilibrante que jugó Brasil. Año 2000: aquella reunión donde Cardoso reúne por primera vez a sus pares del Sur. Es un contexto «defensivo» frente a lo que parecía el destino inmodificable del alca, pero en el que Brasil ya daba signos de estar apostando por el crecimiento de su mercado interno y la expansión internacional de sus empresas. Año 2005: ya con otra configuración política interna y regional, la Cumbre de Mar del Plata termina de cambiar el paradigma y abre una década de diplomacia autónoma y aceleración integradora. Allí, si bien Kirchner y Chávez tuvieron un rol destacado, el peso de Lula fue decisivo para volver inviable el proyecto estadounidense. Año 2016: la crisis política brasileña se lleva puesto al gobierno de Rousseff y, junto con él, la articulación entre el Estado brasileño y las grandes empresas constructoras que, como vimos, había estado en el germen del proceso de integración regional. El ex-presidente Lula y el titular de la principal constructora del país, Marcelo Odebrecht, son convertidos por el Poder Judicial y la elite brasileña en «reos» corruptos. El escándalo del *petrolão*, que destapó una corrupción endémica en cuyo marco la gigante Petrobras servía de vehículo para que empresas privadas financiaran a casi todos los partidos políticos, pone en titulares policiales lo que, junto con corrupciones y desfalcos varios, desplegaba una articulación política y económica de envergadura. Esa articulación tenía como máxima expresión la alianza entre un líder desarrollista y los grandes empresarios locales, cuyo objetivo compartido era construir un mercado interno y grados de inversión local que sustenten un desarrollo capitalista con autonomía relativa. El fin de esa articulación marca también el fin –o al menos la pausa– de todo un ciclo en el proyecto de integración continental.

¿Se trataba de una integración de los «pueblos» o solo era un avance más del capital sobre territorios y poblaciones? Para no caer en subjetividades inconducentes, lo entendemos como una condensación histórica, donde las fuerzas sociales –convertidas en fuerzas electorales en cada uno de los países– pudieron acceder a los poderes ejecutivos y, desde allí, quebrar una dirección del rumbo que parecía ya sin retorno. Donde estaba plantado el alca, se viró hacia nuevos instrumentos autónomos como Unasur o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que aunque tuvieron una impronta más

política que económica, contenían –como vimos con la iirsa-Cosiplan– una dimensión económica-empresaria en su interior. Donde había un juego casi solitario entre empresarios de distintos países y firmas transnacionales (algo que puede verse de forma casi pornográfica en la expansión regional de los empresarios sojeros, para los cuales ya se realizó el paraíso del fin de las fronteras nacionales), el proceso de integración creó una dirección política sobre esa dinámica que antes no existía. Dicho de otro modo: en cualquier proyecto integrador, la presencia de empresas de gran escala resulta necesaria, tanto como una estructura política que las condicione. Expuesta esa matriz material –en general oculta o menospreciada por contener menos romanticismo que las proclamas antiimperialistas abstractas–, la dimensión política de la expansión de Brasil sobre su propia región fue notoria. La dupla Lula-Celso Amorim (canciller durante los dos mandatos y luego ministro de Defensa de Dilma hasta 2014) construyó un protagonismo brasileño inédito en la región. En una entrevista de 2010, Amorim resumía así el carácter de la política exterior de Lula a partir de 2003:

La base de nuestra nueva política exterior fue la profundización de la integración sudamericana. Uno de los grandes activos de los que dispone Brasil en el escenario internacional es la convivencia armoniosa con sus vecinos, comenzando por la intensa relación que tenemos con la Argentina. El gobierno del presidente Lula se ha empeñado, desde el primer día, en integrar el continente sudamericano por medio del comercio, de la infraestructura y del diálogo político.²

Esas palabras estuvieron también en boca de muchos otros cancilleres del arco progresista en la región. Ahora bien, la excepcionalidad de Brasil es que insertaba esa postura dentro de un esquema más amplio, al que solo accedía él mismo. En esa entrevista, Amorim ubica también el proyecto de integración regional en una apuesta internacional mayor, que pocos años después tendría su propio acrónimo, los brics: «La reciente crisis financiera tornó todavía más patente el hecho de que el mundo no puede seguir siendo gobernado por un condominio de unos pocos (...). Países como Brasil, China, la India, Sudáfrica y Turquía, entre otros, pueden contribuir a un nuevo equilibrio internacional»³.

- 1.
Por ejemplo, el periodista Raúl Zibechi desarrolla esta línea en varios artículos, como «Muchas obras, poca integración» en *Brecha*, 18/10/2015, o en su libro *Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo*, Desde Abajo, Bogotá, 2012.
- 2.
C. Amorim: «No novo mapa do mundo, o país está maior» en *O Estado de S. Paulo*, 9/8/2010.
- 3.
Ibíd.

Con esa hoja de ruta, la política exterior de Brasil pudo, por primera vez en la historia, tener voz en conflictos regionales como el golpe de Estado en Honduras, los desafíos regionalistas de las elites agroindustriales a Evo Morales en Bolivia, las sucesivas instancias críticas en Venezuela y el conflicto entre Ecuador y Colombia, por nombrar solo los más resonantes. La ocupación de ese lugar fue el espejo de la ausencia de protagonismo de la diplomacia de EEUU en los últimos años, algo que también parece estar cambiando.

En definitiva, a partir de 2000 y con mucho más énfasis, de 2003, bajo la primera presidencia de Lula, Brasil encontró su destino sudamericano, en el momento en que pareció también encontrar su lugar en el mundo.

¿Esto podría haber ocurrido 10 o 20 años antes? Creemos que no, en tanto esa «voluntad» brasileña solo pudo emerger con fuerza en un determinado momento histórico de la región, cuando la crisis del modelo neoliberal generó, al mismo tiempo, la emergencia de liderazgos progresistas o nacional-populares y el retroceso de la injerencia estadounidense que, al menos durante la última década, quedó sin un libreto coherente para esta parte del mundo. Más pertinente resulta la pregunta de cuánto se avanzó durante esa ventana de oportunidad que hoy parece ir cerrándose. Como toda pregunta nostálgica por el pasado, tiene algo de injusta: siempre se podría haber hecho más. De todas maneras, al menos para quienes tienen una mirada progresista, resulta indudable el avance producido en términos de autonomía política regional. Los gobiernos de este «bloque» acertaron o erraron en diversas áreas, pero en todos los casos lograron niveles de autonomía nacional que habrían sido una rareza durante el siglo pasado. Ni que hablar de los márgenes de maniobra conseguidos por países pequeños como Ecuador o Bolivia, que hoy pueden mostrar, con todos los problemas y errores a cuestas, que son sus gobiernos quienes gestionan sus Estados y definen las políticas públicas. Esa fortaleza interna fue lo suficientemente grande como para tener una traducción fronteras afuera y resolver problemas de gobernabilidad, como conflictos «internos» de la región, sin la participación de agentes foráneos, lo cual es un síntoma incontestable de ampliación de soberanía sudamericana. Como vimos, esta historia reciente no ocurrió solo por la voluntad brasileña, pero hubiera sido una quimera sin ella.

¿Y ahora qué?

¿Qué supone el fin del ciclo de gobiernos del pt en Brasil para la realidad política de la región? En principio, en vistas del brusco cambio político en Argentina y algunas otras señales —como la derrota de Evo Morales en un referéndum constitucional o la nueva mayoría parlamentaria opositora en Venezuela—, podemos concluir que estamos ante una nueva dinámica política regional, de la cual Brasil también es parte. En segundo lugar, al menos por las expresiones públicas del nuevo canciller brasileño, José Serra, se percibe un intento de la elite política brasileña ya no de redefinir los aspectos progresistas y de afinidades ideológicas de la era Lula con sus socios «bolivarianos» —lo que podría verse como una «corrección» de las aristas más ideológicas de la política exterior lulista—, sino de dar vuelta la página al gran programa de inserción regional y mundial que, como vimos, comenzó con Cardoso a principios del siglo xxi.

En estos días, algunos medios brasileños recuerdan la frase que Serra pronunció en marzo de 2015 en el Senado de Brasil: «El Mercosur fue un delirio megalomaniaco», lo cual no deja muchas dudas sobre el espíritu revisionista que le dará a su gestión al frente de la Cancillería. Si bien el proyecto Mercosur hace años recibe críticas por su estancamiento o sus devaneos en conformarse como unión aduanera, unión política o zona de libre comercio, el exabrupto de Serra parece enmarcado en una coyuntura precisa: las avanzadas negociaciones con la Unión Europea prometen tensar los intereses dentro de los sectores empresariales, entre los defensores de algún tipo de protección y quienes prefieren abrir definitivamente la compuerta arancelaria y regulatoria. Si estos últimos ganan, el Mercosur como instancia protectora de industrias y producciones locales frente al comercio mundial dejará de existir. La razón del posible gran viraje brasileño hay que buscarla en una mezcla de intereses empresarios y, ligado a esto, en una mirada en extremo localista de la vieja nomenclatura política del país —ahora repuesta en el poder—, que ve en Brasil un potencial imperio solitario, que ni siquiera necesita mirar a su región para realizarse internacionalmente. Para políticos como José Serra o Aécio Neves, el Mercosur terminó representando un foro en el cual Brasil perdió autonomía y poder de decisión y cedió soberanía frente a vecinos que considera insignificantes (Uruguay y Paraguay) o problemáticos (Argentina y, ahora, Venezuela). Dentro de esa mirada, el

reacomodamiento de Brasil en la región y en el mundo pasa por «liberarse» de las trabas impuestas por ese juego en equipo y por salir a negociar los próximos tratados internacionales por su propia cuenta.

¿Cuál es la trampa en esa postura? Una fáctica y concreta. Fue durante los gobiernos del pt, mientras el poder de decisión en Itamaraty –una fuerte corporación en el interior del Estado brasileño– estuvo al menos compartido entre un político como Amorim y un asesor como Marco Aurelio García, cuando Brasil logró posicionarse como un jugador internacional de peso. Y ese protagonismo fue construido con la lógica inversa, uniéndose con socios menores o iguales, antes que negociando en solitario con las grandes potencias mundiales. Tanto en la propia región americana como junto a los brics, el peso de Brasil en el mundo creció al ampliar, y no reducir, su red de alianzas políticas y económicas.

En ese mismo sentido, el reciente anuncio del cierre de embajadas en lugares «no prioritarios», como África, también da cuenta de que el argumento de volver a tener protagonismo mundial se parece demasiado a un simple eslogan vacío. Lula había dado al continente africano un trato especial, para lo cual abrió embajadas, logró contratos para empresas brasileñas, impulsó programas de cooperación, etc. La apuesta iba, aunque en escala menor, en el mismo sentido que lo hecho por China, que también amplió en estos años su presencia en ese continente.

Si bien en los últimos dos años el impulso chino se aplacó y otras economías emergentes se encontraron con cimbronazos importantes (Rusia, el mismo Brasil), la apuesta por la ampliación del comercio Sur-Sur parece seguir siendo más fructífera que un manso retorno a los vínculos históricamente asimétricos con el Norte. En un reciente artículo de Thomas Bernhardt publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se señala que «según las predicciones del fmi [Fondo Monetario Internacional], de 2015 a 2019, las tasas de actividad económica serán, en promedio, alrededor de dos veces más elevadas en las economías emergentes y en desarrollo que en las economías avanzadas». De la misma manera, Bernhardt considera que el comercio entre países del sur es más ventajoso, en tanto amplía la lista de socios comerciales en lugar de achicarla (algo que también queda demostrado en las balanzas comerciales de estos años en los países de América del Sur), y lo mismo pasa con la calidad de ese comercio, ya que aparecen productos con mayor valor agregado y una intensificación de las redes de distribución intrarregionales. Entonces ¿de qué se trata este reacomodamiento regional e internacional que parece alumbrar el gobierno interino, pero refundacional, del ex-vicepresidente Temer? Tal vez haya que mirar hacia el interior de la alianza política y social que logró ocupar intempestivamente el Planalto, a fuerza de medidas judiciales y acuerdos parlamentarios antes que votos.

En un breve pero sustancioso artículo de 2012, el cientista político Armando Boito Jr. muestra el complejo juego de fracciones dentro del empresariado brasileño y sus vínculos también complejos con el poder político. La tesis de Boito es que los gobiernos de Lula tuvieron un apoyo más o menos consistente de parte de lo que el autor llama la «burguesía interna», que incluiría las grandes empresas vinculadas al mercado interno, la producción y la banca nacional, frente a la «burguesía compradora», mucho más imbricada con los intereses transnacionales y, por ende, con la apertura comercial y una menor regulación estatal. Al analizar el primer y segundo gobiernos de Lula, Boito muestra de qué manera se creó una zona de confluencia entre esa burguesía interna y el gobierno del pt:

Irónicamente, la llamada «crisis del *mensalão*», en la que el capital financiero y la burguesía comercial imaginaban representar el punto de unión (confluencia) para reconquistar el poder gubernamental, fue la crisis que indujo al gobierno de Lula a pasar a la acción ofensiva en la implantación de la política neodesarrollista. La desactivación inmediata del alca, la diplomacia y la política de comercio exterior que

autorizaba la conquista de nuevos mercados en el hemisferio sur, el fortalecimiento de las relaciones de la economía brasileña con las economías sudamericanas, el congelamiento del programa de privatización, el fortalecimiento económico y político de las empresas estatales restantes y el nuevo papel del bndes en la formación de poderosas empresas brasileñas en los más diversos segmentos de la economía configuran un conjunto de medidas de esta política económica que tiende a priorizar los intereses de la gran burguesía interna en detrimento, muchas veces, de los intereses de la gran burguesía comercial y del capital financiero internacional.

Por el contrario, encuentra señales en la prensa «de la insatisfacción del gran capital financiero internacional con esas medidas y de la aspiración de los grandes bancos internacionales por la vuelta del psdb al comando del gobierno». El objetivo de esa fracción de la elite empresaria brasileña parece haberse cumplido con la destitución de Rouseff, pero las turbulencias de estos cambios están lejos de aplacarse.

Si bien en los últimos dos años el impulso chino se aplacó y otras economías emergentes se encontraron con cimbronazos importantes (Rusia, el mismo Brasil), la apuesta por la ampliación del comercio Sur-Sur parece seguir siendo más fructífera que un manso retorno a los vínculos históricamente asimétricos con el Norte. En un reciente artículo de Thomas Bernhardt publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se señala que «según las predicciones del fmi [Fondo Monetario Internacional], de 2015 a 2019, las tasas de actividad económica serán, en promedio, alrededor de dos veces más elevadas en las economías emergentes y en desarrollo que en las economías avanzadas». De la misma manera, Bernhardt considera que el comercio entre países del sur es más ventajoso, en tanto amplía la lista de socios comerciales en lugar de achicarla (algo que también queda demostrado en las balanzas comerciales de estos años en los países de América del Sur), y lo mismo pasa con la calidad de ese comercio, ya que aparecen productos con mayor valor agregado y una intensificación de las redes de distribución intrarregionales. Entonces ¿de qué se trata este reacomodamiento regional e internacional que parece alumbrar el gobierno interino, pero refundacional, del ex-vicepresidente Temer? Tal vez haya que mirar hacia el interior de la alianza política y social que logró ocupar intempestivamente el Planalto, a fuerza de medidas judiciales y acuerdos parlamentarios antes que votos.

En un breve pero sustancioso artículo de 2012, el cientista político Armando Boito Jr. muestra el complejo juego de fracciones dentro del empresariado brasileño y sus vínculos también complejos con el poder político. La tesis de Boito es que los gobiernos de Lula tuvieron un apoyo más o menos consistente de parte de lo que el autor llama la «burguesía interna», que incluiría las grandes empresas vinculadas al mercado interno, la producción y la banca nacional, frente a la «burguesía compradora», mucho más imbricada con los intereses transnacionales y, por ende, con la apertura comercial y una menor regulación estatal. Al analizar el primer y segundo gobiernos de Lula, Boito muestra de qué manera se creó una zona de confluencia entre esa burguesía interna y el gobierno del pt:

Irónicamente, la llamada «crisis del *mensalão*», en la que el capital financiero y la burguesía comercial imaginaban representar el punto de unión (confluencia) para reconquistar el poder gubernamental, fue la crisis que indujo al gobierno de Lula a pasar a la acción ofensiva en la implantación de la política neodesarrollista. La desactivación inmediata del alca, la diplomacia y la política de comercio exterior que autorizaba la conquista de nuevos mercados en el hemisferio sur, el fortalecimiento de las relaciones de la economía brasileña con las economías sudamericanas, el congelamiento del programa de privatización, el fortalecimiento económico y político de las empresas estatales restantes y el nuevo papel del bndes en la formación de poderosas empresas brasileñas en los más diversos segmentos de la economía configuran un

conjunto de medidas de esta política económica que tiende a priorizar los intereses de la gran burguesía interna en detrimento, muchas veces, de los intereses de la gran burguesía comercial y del capital financiero internacional.

Por el contrario, encuentra señales en la prensa «de la insatisfacción del gran capital financiero internacional con esas medidas y de la aspiración de los grandes bancos internacionales por la vuelta del psdb al comando del gobierno». El objetivo de esa fracción de la elite empresaria brasileña parece haberse cumplido con la destitución de Rousseff, pero las turbulencias de estos cambios están lejos de aplacarse.

<http://nuso.org/articulo/brasil-la-crisis-de-un-proyecto-nacional-y-regional/?page=4>

Brasil: un elefante en el «bazar» sudamericano

América Latina se enfrenta a un nuevo escenario. Hoy, lejos de ser un factor de estabilidad, Brasil es combustible de la polarización regional.

Brasil vive momentos críticos. Hace unas semanas la cámara de diputados aprobó dar inicio al proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y el jueves 12 de mayo el senado refrendó la medida, lo cual significó la inmediata suspensión de la mandataria hasta que se defina su destino político. De todas formas, todo indica que en seis meses Rousseff no volverá al Planalto: 55 senadores votaron por iniciar el impeachment y para su remoción se necesitarán 54 votos en la cámara alta.

Por su parte, el ex vicepresidente y hoy jefe de Estado, Michel Temer, está dando señales de que su gobierno pretende trascender el interinato y completar el mandato hasta 2018. En su primer discurso con el traje de presidente, el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) manifestó la «urgencia de pacificar la nación, unificar el país y constituir un gobierno de salvación nacional». Una gran coalición partidaria, los principales resortes del poder económico y político y una considerable parte de la ciudadanía parecen estar dispuestos a otorgarle una luna de miel.

En este marco, la destitución de Rousseff no solo implicaría eyectar del gobierno al Partidos de los Trabajadores (PT), sino que además significaría redefinir los principales lineamientos de política exterior luego de 13 años. A esta altura no sorprende afirmar que por su peso específico cualquier cimbronazo en Brasil termina afectando a toda la región. En este sentido, tomando la conocida metáfora puede decirse que Brasil es un elefante, y Sudamérica, un bazar. Es decir, cualquiera de los escenarios que puede resultar del proceso de impeachment tendrá, sin dudas, un impacto significativo sobre los procesos de integración y cooperación en Sudamérica. Dado este complejo panorama, intentaremos trazar algunas perspectivas de hacia dónde parece ir el gobierno de Temer en materia de política exterior y cómo esto puede impactar en el ámbito de la integración y la cooperación regional.

Pero primero veamos el mapa de posiciones que se vino delineando en los últimos años. Como señala la politóloga e historiadora Miriam Gomes Saraiva, la llegada de Luiz Inácio «Lula» da Silva a la presidencia en 2003 significó, en términos de política exterior, una continuidad con discontinuidades. Y uno de los cambios más notorios fue el ascenso de los sectores autonomistas dentro de Itamaraty¹. Así, en los últimos años convivieron en la clase dirigente brasileña tres perspectivas de política exterior: la primera de ellas coloca a Sudamérica como el espacio geopolítico fundamental del esquema de inserción internacional (Lula, el ex canciller Celso Amorim o el asesor Marco Aurelio García son algunas de las figuras más representativas de esta visión). La segunda perspectiva –al igual que sucede hoy en Argentina– propone un mayor

acercamiento con los países del Norte occidental –especialmente con Estados Unidos y Europa– y una impronta «aperturista» de los esquemas regionales, a tono con la Alianza del Pacífico y los mega acuerdos interregionales de comercio (el PMDB encabezado por Temer, el Partido de la Social Democracia Brasileña, y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo son algunos de los que expresan esta postura). Finalmente, el tercer enfoque propone profundizar la cooperación con los países sudamericanos pero con la idea que Brasil debe asumir, sobre todo, un protagonismo internacional a través de los BRICS. Esta última posición estuvo presente en la era Lula y cobró mayor énfasis durante el gobierno de Dilma, especialmente en su primer mandato.

Lo cierto es que, más allá de las convulsiones políticas de estos meses, desde hace un tiempo considerable que la crisis viene repercutiendo en la política externa del gigante sudamericano. En primer lugar, porque las crisis obligan a los gobiernos a redistribuir los esfuerzos y a menudo esto implica bajar el perfil internacional. Ello se observa en el repliegue de las principales espadas del Estado brasileño destinadas a aumentar la influencia en la región –Petrobras y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES)– así como en la pérdida de competitividad de las grandes empresas industriales –Odebrecht, Camargo Correa, Vale o JBS– producto de la falta de crédito y la paralización de contratos públicos. Además, es difícil que la debilidad interna no se traduzca en debilidad externa. En este sentido, hoy en día resulta impensable que un gobierno brasileño pudiera impulsar la creación de nuevas instancias regionales –como fue el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Consejo de Defensa Suramericano–; confrontar con Estados Unidos – como hizo cuando Edward Snowden reveló que Washington espiaba al gobierno de Rousseff– o que intente terciar en Medio Oriente, como en la ocasión en que se ofreció como, junto a Turquía, como mediador ante a Irán y su política nuclear.

Pero la crisis brasileña tiene un condimento distintivo. El peso de político, económico y militar de Brasil hace que, por acción u omisión, los vaivenes de política interna y externa incidan directamente en las dinámicas de conflicto y cooperación regional. Además de afectar seriamente la balanza comercial de los países vecinos, producto de la contracción del mercado interno, la destitución de un presidente por un delito inexistente –haber «maquillado» la cuentas públicas– establecería un riesgoso antecedente político para la región, que superaría con creces a las destituciones presidenciales en Honduras o Paraguay. Pero, sobre todo, la crisis está generando una situación novedosa: la dinámica política brasileña se polarizó de tal forma que produjo una grieta externa, forzando a los países de la región a tomar partido a favor o en contra del nuevo gobierno. Más que acercar posiciones –como supo hacer con bolivarianos y neoliberales o con izquierdas y derechas– hoy en día Brasil fomenta controversias más allá de sus fronteras, algo que Lula en su afán de convertir a Brasil en un líder regional, siempre había intentado evitar.

- 1.

Miriam Gomes Saraiva: «Brazilian foreign policy towards South America during the Lula Administration: caught between South America and MERCOSUR», en *Revista Brasileira de Política Internacional* vol. 53, 2010.

<http://nuso.org/articulo/brasil-un-elefante-en-el-bazar-sudamericano/>

El escándalo de los Panama Papers pone al mundo económico y al sistema bancario en alerta. ¿Cómo combatir el secretismo corporativo?

¿Qué tienen en común los recién revelados [Panama papers](#), ExxonMobil y una empresa minera canadiense que opera en Guatemala? Que todos son casos en los que personas y organizaciones poderosas trataron de usar una fachada para ocultarse, engañar o confundir. Y en todos, el intento fracasó.

Es probable que el escándalo mundial que generaron los *Panama papers* (11,5 millones de archivos extraídos – según parece, por *hackers*) de computadoras de la firma jurídica panameña Mossack Fonseca, cuarta mayor gestora *offshore* del mundo) dure algún tiempo. La publicación de los archivos reveló hasta dónde pueden llegar las personas (y a qué costo) para ocultar activos y evadir impuestos. Lo que se descubrió hasta ahora es un espectro de actividades que van desde usos legales (pero éticamente dudosos) de lagunas en la legislación impositiva hasta intentos de ocultar o lavar dinero obtenido de la corrupción u otras prácticas ilegales.

La reacción, dura e inmediata, fue un repudio casi universal. El escándalo ya provocó la renuncia del primer ministro de Islandia, tras revelarse que poseía acciones de empresas *offshore* con su esposa. También salpica a parientes de altos funcionarios chinos (incluido el presidente Xi Jinping) y miembros del círculo íntimo del presidente ruso Vladímir Putin.

Xi y Putin no tienen mucho de qué preocuparse. Pero semejante hipocresía de parte de funcionarios públicos que proclaman la necesidad de medidas de austeridad y piden a la gente hacer sacrificios en aras de la prosperidad futura, mientras ellos en secreto evitan el esfuerzo, es una total falta de respeto a la confianza de la ciudadanía en los países democráticos. Si esas empresas fantasma y cuentas bancarias *offshore* eran legales, ¿por qué tomarse tantos recaudos para ocultarlas? Y si el secreto es legal, ¿por qué está mal?

Entretanto, el secretismo corporativo puso a ExxonMobil en la mira de las fiscalías de Nueva York, Massachusetts y las Islas Vírgenes; y hay muchas otras jurisdicciones en lista de espera. El núcleo de la investigación es determinar si la empresa viene mintiendo deliberadamente en relación con el cambio climático desde los años ochenta.

[Hay documentos internos](#) que indican que Exxon, y luego ExxonMobil, conocían los [efectos dañinos del cambio climático](#), pero no dijeron nada ni a los inversores ni a la opinión pública. En sus declaraciones públicas (incluso el año pasado), la empresa negó una y otra vez el riesgo del cambio climático. Cuando pudo admitir la verdad y empezar a actuar con transparencia, ExxonMobil eligió seguir sembrando confusión.

En Canadá, Hudbay Minerals está implicada en un [juicio](#) que puede ser el fin de la impunidad para las empresas que descargan en subsidiarias toda la responsabilidad por sus actividades en el extranjero. En vez de aplicar a los países donde operan las normas éticas y legales de sus países de origen, muchas empresas occidentales arman una red de subsidiarias, subcontratistas y cadenas de suministro para ocultar de los consumidores e inversores conductas que estos considerarían reprochables. Hudbay Minerals fue llevada a juicio por un caso de violaciones en masa y daños en Guatemala, ocurrido cuando un grupo de soldados y personas que se presentaron como agentes de seguridad de la empresa propietaria de una mina local llegaron a una pequeña aldea con orden de desalojar a sus habitantes.

El caso parece complejo, ya que involucra diversos propietarios, numerosas subsidiarias y una variedad de jurisdicciones. Pero el principio en juego es simple: las empresas matrices deben hacerse responsables de supervisar las acciones de quienes las representan. El ocultamiento tras capas y capas de propiedad jurídica no puede continuar. Y no lo hará si adoptamos una estrategia con tres componentes, a los que podríamos llamar «zanahoria», «palo» y «ventilación».

La zanahoria (incentivos a la conducta ética) consiste en reconocer y premiar a los que admitan errores pasados y muestren voluntad y una estrategia efectiva para enmendarlos. El palo (sancionar a los transgresores) demanda una mayor fiscalización de las normas legales y éticas, tanto para evitar la evasión y la elusión fiscal cuanto el ocultamiento tras subsidiarias. Y la ventilación consiste en señalar las actividades de los transgresores, sea en el nivel de las comunidades locales o mediante investigaciones a gran escala como el extraordinario esfuerzo global de los cientos de periodistas que cooperaron para sacar a la luz los *Panama papers*.

Pero esta estrategia no debe convertirse en una campaña de relaciones públicas para corporaciones, funcionarios o empresas de medios. El repudio al secretismo debe parecerse a un proceso de verdad y reconciliación, en el que los transgresores ofrezcan una exposición pública completa de su conducta, tal vez acompañada por el testimonio de las víctimas.

Lo más importante es que para que las juntas directivas (y los abogados, banqueros y contadores que asesoran a personas y empresas) respeten las normas legales y éticas, deben saberse responsables por sus acciones. En cuanto todos entiendan que el secretismo supone riesgos inaceptablemente altos, tratarán de minimizarlos. Les guste o no, es hora de que nuestros líderes hagan lo mejor para ellos y para nosotros.

Traducción: Esteban Flamini

Fuente: Project Syndicate

<http://nuso.org/articulo/la-guerra-al-secretismo/>
